



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 1

Expte nº: 2892/2023 AML

Autos: “PROVINCIA DE TUCUMAN c/ ADMINISTRACION
FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS s/IMPUGNACION DE DEUDA”

Sentencia Definitiva del Expte. Nº 2892/2023

Buenos Aires,

I.- Surge de autos que la Provincia de Tucumán, interpuso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación recurso de apelación contra la Resolución nº 1940/16 (DI CRSS) de la Administración Federal de Ingresos Públicos, a fin de obtener la declaración de nulidad de la Resolución nº 6726 dictada por la Obra Social para la Actividad Docente (OSPLAD).

II.- En primer término debe señalarse que el recurso que ha sido interpuesto sin dar cumplimiento a la carga de orden formal a que hace referencia el art. 15 de la ley 18.820, por lo que corresponde analizar, en primer término, si en autos se da alguna de las circunstancias que hacen mérito, conforme criterios sentados por el Alto Tribunal, para apartarse de lo establecido por el citado art. 15 de la normativa citada y resolver, en consecuencia, sobre el planteo de inconstitucionalidad formulado.

El art. 15 de la ley 18.820 (modificado por la ley 23.473) expresamente dispone que “... deberá depositarse el importe de la deuda resultante de la resolución administrativa; su omisión producirá la deserción del recurso”; por su parte, el art. 39 bis del decreto ley 1285/58, modificado por el art. 26 de la ley 24.463, dispone que deberá depositarse el importe resultante de la resolución impugnada.

Este tribunal ha resuelto en autos “Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán c/ AFIP-DGI s/ Impugnación de Deuda”, sentencia definitiva 161290 del 03/06/2014, que dada la naturaleza jurídica de la contribuyente y a que sus operaciones están garantizadas por la provincia de Tucumán (art. 6 de la ley provincial 5115), resulta de público y notorio la solvencia del ente reclamado, criterio que corresponde hacer extensivo a estos autos y tener por habilitada la instancia.

III.- La recurrente argumenta que OSPLAD efectuó una determinación de deuda sobre datos inexactos, incluyendo cuiles de personas no afiliadas a dicha obra social, como así también personas afiliadas con posterioridad a los períodos determinados. Solicita la nulidad de la Resolución Nº 6726 al considerar que los agentes mencionados se encuentran afiliados a otra obra social que diera lugar a la 1940/16 (DICRSS) dictada por AFIP. A la vez, atendiendo a la cuestión de fondo considera que no corresponde abonar ningún tipo de aportes y contribuciones con destino a obra social sobre los montos percibidos por parte de los empleados públicos provinciales en concepto de



vales alimentarios. Finalmente planteo la prescripción de los períodos 1/2003 a 5/2004.

IV.- En primer término, cabe señalar que la parte actora presentó el recurso de apelación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tal lo dispuesto expresamente por la Resolución N° 1940/2016 (DI CRSS).

Sin embargo, el Alto tribunal con fecha 17 de junio de 2017, resolvió que las presentes actuaciones no correspondían a su competencia originaria y, en consecuencia, remitió las actuaciones a esta Cámara.

Así, previo a resolver sobre el fondo de la cuestión, esta Sala dictó la sentencia interlocutoria de fecha 17 de noviembre de 2023, que rechazara la cautelar requerida por la actora.

V.- Preliminarmente se remarca que las presentes actuaciones tienen su origen en la deuda intimada por falta de pago de aportes y contribuciones por conceptos no remunerativos (vales alimentarios).

Sentado ello, y en orden a la cuestión traída a conocimiento de este Tribunal, a priori se puntualiza que más allá del marco normativo referido a las disposiciones que dicte la provincia sobre los salarios del sector público, en la presente se analizará el procedimiento llevado a cabo para determinar la deuda que se discute en autos.

De esta manera, ha de ponderarse que el procedimiento administrativo haya asegurado el pleno y cabal conocimiento del interesado de la gestión llevada a cabo, permitiéndole argumentar, producir y controlar todas las medidas de prueba que proponga y hagan a su derecho, como así también las que la propia administración impulse en su búsqueda de la verdad. Con ello, no sólo se garantiza el derecho de defensa de éste, sino una mayor racionalización y eficacia de los trámites administrativos, facilitándose a los funcionarios que deben expedirse una información más amplia y completa. Posteriormente, compete al organismo administrativo apreciar las probanzas producidas, no ya en base a principios rígidos, sino de manera lógica y natural, aquilatando cada una de ellas en su individualidad y dentro del conjunto de la rendida (cfr. Sala II, en autos "CENTAURO S.A. c/ Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social s/ Impugnación de deuda", sentencia definitiva del 11/05/21).

Sentados los conceptos precedentes, en los agravios esgrimidos por la recurrente, se ha señalado la determinación de deuda sobre datos inexactos, incluyendo cuiles de personas no afiliadas a dicha obra social, como así también personas afiliadas con posterioridad a los períodos determinados.

Si bien se observa en la resolución de AFIP, que se ha dejado sin efecto el cargo por los cuiles allí descriptos –ver punto VI del resolutorio–, en otro tramo del mismo desestima el planteo de la recurrente, sin esclarecer suficientemente lo peticionado por la accionante respecto a los datos inexactos expuestos en las actas y la consignación de afiliados no pertenecientes a la entidad, lo que pudo ocasionarle a la accionante errores de cálculo, hecho que no se encuentra debidamente fundado en la resolución apelada.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 1

De esta manera, la garantía del debido proceso legal lleva aparejado diversos elementos integratorios para el administrado; el derecho a ser oído, a ofrecer y producir pruebas y a que se dicte una decisión fundada que contemple sus alegaciones y resuelva sus pretensiones.

A mayor abundamiento, corresponde señalar que si en el proceso administrativo se procura la preparación y el dictado de actos administrativos con los cuales se satisface en forma directa e inmediata las necesidades colectivas y los fines del Estado y en definitiva de la comunidad toda, no es menos cierto que estos actos están dirigidos por la exigencia de su legitimidad, o sea de su subordinación completa al orden jurídico del cual resulta todo lo atinente a la oportunidad, mérito y conveniencia (en este sentido, Escola Héctor J: Tratado General de Procedimiento Administrativo, Ed. 1975).

En los procedimientos de impugnación es el administrado quien pretende la actuación de la ley, en sentido lato, entendiendo que su pretensión procede más que la articulada por la Administración, sin perjuicio de que ésta ratifique su accionar.

García Oviedo señala que “las exigencias propias de un estado de derecho imponen a la administración un régimen jurídico que ordene su vida y al propio tiempo, garantice a los particulares sus situaciones jurídicas frente al obrar de aquella” (García Oviedo, Derecho Administrativo, Madrid, 1959, T. 1, PÁG. 619).

Por ello, en el procedimiento administrativo impera el principio de verdad material o real. La administración debe llevar a cabo las medidas de prueba que sean conducentes para determinar la realidad efectiva de los hechos. De esta manera, compete al organismo administrativo apreciar las probanzas producidas, no ya sobre la base de los principios rígidos sino de manera lógica y natural, aquilatando cada una de ellas en su tramitación previa resolución que se recurre.

En este aspecto, en los presentes actuados la cuestión se centra en efectuar un exhaustivo control de los elementos que componen la resolución y los antecedentes recabados para la determinación de la deuda, con el objeto de dictar una resolución lo más acorde posible con la realidad de los hechos.

Así, a fin de garantizar con plenitud el derecho del recurrente a ser oído y defenderse, corresponde dejar sin efecto la resolución recurrida de acuerdo a las argumentaciones expuestas en la presente.

En igual sentido, se ha expedido esta Sala en autos “Johnson Acero S.A. c/ Administración Federal de Ingresos Públicos s/ Impugnación de Deuda”, sentencia 90594, del 7 de febrero de 2001.

Por lo expuesto, no resultando de las constancias de autos que se hayan arbitrado medidas suficientes para indagar la verdad objetiva de los hechos, ni aplicado criterios de razonabilidad, a fin de que el pronunciamiento produzca efectos jurídicos válidos (cfr. art. 1 incls. a, b c y f de la ley 19.549 y esta Sala en autos “Industrias Metalúrgicas



Dino Bartoli c/ Administración Federal de Ingresos Públicos –DGI- s/ Impugnación de Deuda”, sentencia definitiva N° 119.396 del 29/06/06, entre otros), corresponde declarar formalmente admisible el recurso y dejar sin efecto la resolución recurrida.

En similar sentido, se ha pronunciado esta Sala el día 13 de marzo de 2024, en autos “Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán c/ Administración Federal de Ingresos Públicos s/ Impugnación de Deuda”, Sentencia Definitiva del Expte. N° 69092/2019.

VI.- Respecto al planteo de prescripción parcial de uno de los períodos reclamados, si bien es criterio de este tribunal la aplicación del art. 16 de la ley 14.236, el que dispone que las acciones por cobro de contribuciones, aportes, multas y demás obligaciones y demás obligaciones emergentes de las leyes de previsión social prescribirán a los 10 años, atento a como se resuelve la cuestión resulta abstracto pronunciarse en este sentido.

VII.- Dado el resultado alcanzado, dada la particularidad de la temática abordada, pudo válidamente generar en la parte actora la creencia de que contaba con un mejor derecho a litigar o, al menos, de lograr esa respuesta en el ámbito judicial. Por esa razón, las costas deben distribuirse en el orden causado (artículo 68, segunda parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

La Dra. Victoria Pérez Tognola no vota en virtud de hallarse en uso de licencia (art. 109 RJN).

Por ello, visto el dictamen del Sr. Fiscal General, este TRIBUNAL RESUELVE:
1) Declarar formalmente admisible el recurso de apelación interpuesto; 2) Dejar sin efecto la resolución recurrida, de acuerdo a las fundamentaciones expuestas en la presente; 3) Costas por su orden (art. 68 párrafo segundo del CPCCN).

Regístrese, notifíquese y remítase.

